

# Boletín Oficial

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18, á 20 rs. trimestre para esta Capital y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

### Parte oficial de la Gaceta.

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (q. D. g.), y su augusta Real familia, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

#### REAL DECRETO.

Conformándose con lo propuesto por el Presidente de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda desde esta fecha levantado el estado de sitio en todas las provincias de la Monarquía.

Art. 2.º Los Tribunales y las Autoridades civiles volverán á desempeñar sus atribuciones ordinarias.

Art. 3.º Las causas pendientes se reanudarán para su continuación á los Tribunales llamados á conocer de ellas en estado normal.

Art. 4.º Por los respectivos Ministerios se comunicarán las instrucciones oportunas para el cumplimiento de lo prevenido en este decreto.

Dado en Palacio á 7 de marzo de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Ramon Maria Narvaez.

(Gaceta de 8 del actual)

**ORENSANOS.** El estado excepcional de que acabais de salir no ha dejado rastro alguno en esta provincia. A nadie se le ha hecho derramar una lágrima, no se le ha causado el mas pequeño disgusto, á na-

die se obligó á salir de su domicilio; todos pudisteis disfrutar y habeis disfrutado de los goces legítimos, que la buena sociedad, la cultura y la decencia permiten; vuestros deseos en esta parte no fueron contrariados y ni aun cohibidos. Todo esto se debe á vuestra proverbial cordura, á esa sensatez de que tantos y tan repetidos testimonios habeis dado, aun en las circunstancias mas difíciles por que tiene atravesado esta nación.

Ahora, pues, que este estado ha desaparecido; ahora que al rigor y tirantez de la ordenanza y de las leyes militares sucede el imperio dulce y suave de las leyes civiles y de los tribunales y autoridades encargadas de su ejecución y cumplimiento, continuad siendo tan morigerados como lo erais antes y como lo fuisteis despues. Sean los habitantes de la provincia de Orense tan leales á su Reina, tan obedientes á la ley, al Gobierno y á las autoridades constituidas como lo fueron siempre. Seguid siendo como hasta aquí modelo de virtud, de laboriosidad y de aplicación al trabajo, y obrando así, tendreis tranquilidad de conciencia, el bienestar que necesitáis para vosotros y para vuestras familias y la benevolencia de vuestro Gobernador.

Orense marzo 11 de 1867.

El Gobernador,  
Lucas García de Quiñones.

#### MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

##### EXPOSICION A S. M.

Señora: Diferentes reclamaciones elevadas á este Ministerio han dado á conocer la diversa aplicación que se ha dado en algunas Audiencias á las disposiciones del Real decreto expedido en 9 de octubre de 1865, por el cual fueron derogadas todas las dictadas hasta aquella fecha relativas á categorías en el orden judicial y Ministerio fiscal. Habia precedido á esta resolución el Real decreto expedido en 2 de noviembre de 1853, previniendo en su art. 4.º que en lo sucesivo las plazas de la Secretaría de Gracia y Justicia no dieran derecho á figurar en los escalafones del orden judicial, pero conservándolo los que lo tuvieran adquirido; y disponiendo en el 6.º que las categorías, derechos y preeminencias anejas á dichas plazas se arreglaran á lo establecido en el Real decreto de 18 de junio de 1852, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, para clasificar las categorías de los empleados de la Administración activa. El Real decreto de 9 de abril de 1858, al organizar las categorías y funciones del Ministerio público habia dispuesto tambien en su art. 16 que cesaran las categorías de analogía establecidas en el Real decreto de 7 de marzo de 1851; de manera que, por ambas disposiciones y desde sus fechas respectivas, separadas ambas carreras de la judicial, habia desaparecido la competencia que respecto á antigüedad y precedencia podia ocurrir entre los Magistrados de Audiencia y los empleados que procedentes de aquellas carreras ingresaran en la Magistratura y pudieran alegar antigüedad en la misma, anterior á su ingreso y adquirida por servicios prestados en las de que procedían. Quedaban tan solo con derecho á reclamarla, si se exceptúan los Secretarios y Vicesecretarios del Tribunal Supremo de Justicia y de las

Audiencias, los que hubieran llegado á obtener dichas categorías en el periodo intermedio desde la publicación del Real decreto de 7 de marzo de 1851 hasta la de los dos referidos Reales decretos respectivamente de 2 de noviembre de 1853 y 9 de abril de 1858, y su derecho tenia que fundarse en el que habian adquirido al amparo de las disposiciones que crearon las categorías de analogía y las declaraciones posteriores, reconociendo en ellas el de antigüedad y similitud de derechos á los que desempeñaban cargos en el orden judicial. El Real decreto de 9 de octubre de 1865, si bien en la exposicion que le precede reconoce lo respetable de estos derechos y la dificultad de desatenderlos, sin prescindir del cuestionable principio de que la ley no puede tener efecto retroactivo, dispone en su artículo 2.º que desde aquella fecha los funcionarios del orden judicial y del Ministerio público no tendrán otra categoría que la correspondiente al cargo que real y efectivamente desempeñen, y su antigüedad en el mismo solo se contará desde el día de su posesión, cualquiera que sea el quo antes hubieren ejercido. Esta disposición tan terminante, y el no indicarse en el mismo Real decreto declaración alguna que reserve los derechos adquiridos en virtud de las que el mismo deroga, ha dado lugar á la diversa inteligencia que ha tenido esta disposición en las Audiencias, y segun ella á las reclamaciones producidas por los que se han ovido perjudicados en el lugar y antigüedad que tenían reconocidos. El Ministro que suscribe no puede menos de considerar atendibles reclamaciones fundadas en principios tan respetables, y con el fin de reparar los perjuicios que haya podido ocasionar una interpretación excesivamente rigurosa, y evitar dudas para lo sucesivo, interin se publica la ley orgánica de Tribunales en que habrá de fijarse definitivamente los derechos y relaciones de los funcionarios del orden judicial y Ministerio público, oido el parecer



de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad en este punto con su dictamen, tiene la honra de presentar a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 1.º de marzo de 1867.  
Señora:—A L. R. P. de V. M.  
Lorenzo Arrazola.

#### REAL DECRETO.

Atendiendo a las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º A los funcionarios que, según las disposiciones del Real decreto de 7 de marzo de 1851 y demás resoluciones posteriores, habían obtenido categorías en el orden judicial o Ministerio fiscal, antes de la publicación del Real decreto de 9 de octubre de 1855, se les respetarán los derechos adquiridos en la forma que las mismas indicadas resoluciones los tenían declarados.

Art. 2.º Los funcionarios que tuvieran adquiridas dichas categorías, si fueren nombrados para servir cargos de otra inferior, tendrán de serlo en comisión, a no ser que lo fueren a su instancia o en virtud de permisión, en cuyo último caso nunca lo serán en perjuicio de la antigüedad ya adquirida por los dichos individuos del Tribunal o Corporación a que fueren destinados.

Art. 3.º Que la subsistente lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto de 9 de octubre de 1855, según el cual el Jefe de la Audiencia de Madrid gozará la antigüedad de Ministro del Tribunal Supremo de Justicia desde el día en que tomó posesión de aquel cargo. En los demás casos seguirá continuándose la antigüedad en el Tribunal Supremo de Justicia por la fecha de la toma de posesión de plaza en el mismo Tribunal.

Dado en Palacio a 1.º de marzo de 1867.—Esta rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

(Gaceta de 5 del actual.)

#### MINISTERIO DE ESTADO.

Dirección de los Asuntos políticos.

El Ministro de Estado al Embajador de S. M. en Roma;

Madrid 4 de marzo de 1867.—Excmo. Sr.: Mucho tiempo ha que algunos periódicos extranjeros se han dedicado, con no envidiable afán, a propagar en sus columnas las más odiosas calumnias contra nuestra patria y sus más altas y venerandas instituciones. Ni el carácter general de los españoles, ni la vida pública, ni aun la privada a veces, de las personalidades más eminentes del país han podido salvarse de tan alambicadas acusaciones; y desfigurando o falsificando la historia de la nación y de los hombres, se ha llegado en frecuentes casos hasta la calificación de todos, provocada casi siempre por

los sentimientos más miserables posibles.

La santa Religión que profesamos, sus venerables Prelados y respetables ministros; la Monarquía secular, bajo la cual vivimos; la bondad y esclarecida Reina que ocupa el Trono; la Augusta Familia que la rodea; las Cortes del Reino; los Tribunales de Justicia, el Ejército, la Marina, y cuantos ramos y los otros ramos de la Administración pública han llegado a ocupar una posición elevada, todo aquello y todos estos, instituciones y personas, todo ha sido en ocasiones distintas y en periódicos diversos objeto de calumnia: todo se ha intentado difamar más o menos grave y frecuentemente.

Ni tan reprobados medios son de hoy, señor Embajador, ni en muchas ocasiones ha sido dable alcanzar la real contradicción de los absurdos imaginados ni de las calumnias propaladas a sabiendas, pues hay casos en que las exageradas pero justificadas rectificaciones que los ataques hacían necesarias han sido negadas a las legaciones de S. M. y a las particulares, por las redacciones de los periódicos que con esta doble felonía tan grandemente se deshonran.

Pero si V. E. sabe que lo rotulado no es nuevo, habrá observado sin duda que de algún tiempo a esta parte la grosor de las calumnias ha aumentado, llegando a constituir en ciertos periódicos un sistema de difamación tan estrepitoso, que aun practicado por extranjeros nos avergüenza, como indudablemente sonroja a las gentes sensatas y dignas de todos los países que de tales libelos se enteran, sin exceptuar justamente y para honra de ellos, a la prensa mayoría de los nuestros en que se inquirían.

Frecuentemente y en algunos periódicos extranjeros se han publicado las más odiosas diatribas, tan falsas como siempre, tomando por principal objeto la augusta Señora que ocupa el Trono y su Real Familia; y ante tal estado de cosas el Gobierno de España no puede guardar un silencio que, si hasta ahora ha sido la más significativa señal del profundo menosprecio con que el país miraba tan villanos medios, podría llegar a interpretarse, al menos por las gentes que son capaces de emplearlos, como una tolerancia inspirada por el miedo.

Sabe V. E. que, llegados a este punto, solo dos recursos podrían emplearse: permitir que los periódicos de nuestra patria entablasen una polémica defensiva que sería difícil se mantuviese sin llegar a la agresión que por nuestra parte condenamos, y cuyos tiros no es posible prever hasta donde llegarían, haciendo presencia a la Europa el más indigno pugilato de calumnias y denuestos a que la inteligencia humana se hubiese rebajado en ninguna época del mundo; o acudir a los Tribunales del país, en que los insultos más sucios son posibles contra una Reina, tan solo porque Dios ha colocado en

su frente una Corona que su pueblo ha mantenido con amor y arrojo contra toda suerte de enemigos, y por ello inspira tan insigne odio a los que desean destruir a la Reina no se paran ante la Señora, la madre ni la esposa.

Ya comprende V. E., Sr. Embajador, que el primero de los recursos indicados no puede practicarse por una nación digna, leal y honrada, siquiera su noble ejemplo no sea mutilado por las innobles pasiones de mezquinas parcialidades, en todas partes despreciadas; antes que descender a semejante terreno los escritores españoles romperían sus plumas; pues no han quedado aquí otros capaces de suscribir una adhesión y felicitación a un diario extranjero por haber calumniado a su Reina, tratado de humillar su país, e intentado falsificar la historia de los sucesos de ayer, en que criminalmente intervinieron.

Para acudir a los Tribunales, que sin duda harían justicia, cualesquiera que ellos fuesen, sería necesario mezclar en la acusación la personalidad augusta de nuestra Soberana, el nombre de la nación española, el de sus más respetables varones y la representación de su Gobierno; poniendo todo esto, según los casos, enfrente de un periodista que, por mal enterado, por interés de bandería o tal vez por motivos más dignos aun, extremaría en una defensa sus calumnias, multiplicaría sus insultos, aumentaría sus diatribas y concluiría por violarse de una condenación que, después de haberle servido para sus fines políticos o de otro género, solo le habría costado, o un puñado de monedas, o una pena personal que, desde una oscura o completa insignificancia, le colocaba por el hecho de haber osado, en el rango de los hombres conocidos, siquiera fuese por el escándalo y aun para la reprobación de las gentes burladas, que solo así llegarían a tener noticia de su existencia.

No es, pues, tampoco este medio aceptable; y el Gobierno lo rechaza porque, próspera o adversamente empleado, ni satisface lo que compromete, ni alcanza a la altura de lo que en muchos casos habría descendido hasta su caudiente arena, y puede servir para fines tan reprobados que ni aun indirectamente deben ser servidos por nadie que se estime.

Tales consideraciones era conveniente exponerlas a V. E.; aunque su propio honor y conciencia ya se las habrán revelado, para explicar la conducta que el Gobierno de S. M. ha seguido y seguirá en los casos en que una insignificante parte de cierto género de prensa extranjera se ha propuesto calumniar o continuar calumniando y creyendo insultar a las instituciones y altas colectividades o respetables personas de nuestro país.

Ni el Gobierno como entidad moral, ni los Ministros personalmente, ni directa ni indirectamente, usarán ni consentirán, en cuanto las leyes lo permitan, el medio de responder

indignamente a las indignidades: ni autorizarán en ningún caso ante un Tribunal ni de otro modo un juicio contradictorio de lo que se halla por sí mismo fuera de todo juicio legal, y perfectamente apreciado y respetado por la verdadera opinión pública de propios y extraños, la cual obligará a la historia a rechazar o a olvidar, para no mancharse, la calumnia que hoy mismo solo logra el menosprecio que merece de todo el que se ante en su conciencia el respeto a la justicia y a los impulsos de la honradez.

Sírvase V. E., pues, aprovechar cuantas ocasiones se le presenten o crea conveniente protocolar para hacer públicos, oficial y confidencialmente, estos propósitos del Gobierno español y sus fundamentos, pues es posible que maliciosa o equivocadamente se interpreten, sin tener en cuenta las altísimas e importantes consideraciones que el Gobierno de un país no debe olvidar nunca, siquiera como ahora ponga a las individualidades que lo forman sacrificios que solo su dignidad y el deber de conservarla pueden hacer soportables; por más que los Ministros reconozcan y se sometan al derecho de censura hasta apasionada, siempre que sea decente, que la prensa nacional y extranjera pueda ejercer sobre sus actos, de los cuales son y se declaran únicos responsables.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Eusebio de Calonge.

(Gaceta de 6 del actual.)

REPTACIONES.

Por una equivocación involuntaria se ha publicado en la parte oficial de la Gaceta de ayer, colmo dirigido exclusivamente al Embajador en Roma, un despacho circular que el Sr. Ministro de Estado ha pasado a todos los representantes de S. M. en el extranjero.

(Gaceta de 7 del actual.)

#### ANUNCIOS OFICIALES.

Consejo provincial de Orense.

En cumplimiento de lo que dispone la Real orden de 21 de abril de 1859 y la instrucción de 16 de setiembre de 1848, procedió el Consejo provincial en sesión del Señor Comisario de Guerra de esta provincia a fijar los precios a que se han de liquidar y abonar las especies de suministros hechos por los pueblos de la misma en el mes actual a las tropas del ejército y guardia civil en la forma siguiente:

Es. Ms.	
Pan, ración. . . .	0,144
Trigo, idem. . . .	0,484
Cebada, idem. . . .	0,558
Cebada, idem. . . .	0,410
Maiz, idem. . . .	0,217
Paja, kilogramo. . .	0,022
Yerba seca, idem. . .	0,056
Leña, idem. . . .	0,015
Aceite, litro. . . .	0,608

Lo que se hace público por medio



del Boletín oficial para conocimiento de los pueblos de esta provincia, Orense 2 de marzo de 1867. — El Presidente, Luciano Figueroa. — El Comisario de Orense, Manuel Suarez Vilariño. — El Secretario, Luis Felipe de la Peña.

### Rectorado

#### de la Universidad de Santiago.

El Ilmo. Sr. Director general de Instrucción pública con fecha 23 de febrero último, me remite para su publicación el siguiente anuncio.

«Está vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la cátedra de Elementos de Terapéutica y de Farmacología, Arte de recetar, la cual ha de proveerse por concurso con arreglo al artículo 226 de la Ley de Instrucción pública y 39 del Real decreto de 23 de febrero anterior, entre Catedráticos numerarios de provincia.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas en el término de tres meses, a contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, por el conducto que determina el artículo 40 del Reglamento de 12 de mayo de 1864.

Lo que se publica en los estrados de esta Universidad y Boletines oficiales de este distrito para conocimiento de los interesados, quienes deberán tener presente que el plazo espira en 25 de mayo próximo.

Santiago 2 de marzo de 1867. — El Rector, Juan José Vilas.

El Ilmo. Sr. Director general de Instrucción pública con fecha 23 de febrero último, me remite para su publicación el siguiente anuncio.

«Está vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, la cátedra de Patología quirúrgica, operaciones, análogos y vendajes, la cual ha de proveerse por concurso con arreglo al artículo 226 de la Ley de Instrucción pública y 39 del Real decreto de 23 de febrero anterior, entre Catedráticos numerarios de provincia.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes documentadas en el término de tres meses, a contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta, por el conducto que determina el artículo 40 del Reglamento de 12 de mayo de 1864.

Lo que se publica en los estrados de esta Universidad y Boletines oficiales de este distrito para conocimiento de los interesados, quienes deberán tener presente que el plazo espira en 25 de mayo próximo.

Santiago 2 de marzo de 1867. — El Rector, Juan José Vilas.

### PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Tribunal de Cuentas del Reino. — Secretaría general. — Negociado 2.º — Por el presente y en virtud de acuerdo del Ilmo. Sr. Ministro Jefe de la Sección 4.ª de este Tribunal se cita, llama y emplaza por segunda vez a D. Francisco Muñoz Rodin, carabinero que fué en la Comandancia de la provincia de Orense en el año de 1857, cuyo paradero se ignora, a fin de que en el término de veinte días, que empezarán a contarse a los diez días de publicado este anuncio en la Gaceta, se presente en esta Secretaría general por sí o por medio de encargado a recoger y contestar el pliego de reparos ocupado

en el exámen de la cuenta del Tesoro por 1857, y pagos de la citada provincia, correspondiente al mes de junio de 1861; en la inteligencia que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Madrid 1.º de Marzo de 1867. — Ignacio Suarez Vicalá.

El Jefe de la Sección 4.ª — D. José Selas, secretario accidental del juzgado de paz de Verre.

Certifico que en juicio verbal celebrado en dicho juzgado, se dictó la sentencia que copio:

En la audiencia del juzgado de paz de Verre a 19 de enero del año de 1867, el señor D. José Alonso, primer suplente que entiende en este procedimiento por indisposición del principal, haciendo cierto el juicio verbal que antecede en el que se reclama por Benito Díaz y José Fernández, tres ferrados de centeno que Manuela Domínguez y Genara Cao le están demandando, o en su defecto 21 rs. que como cabaleros del foral Casal de María le están demandando por frutos de 65.

Visto la demanda y contestación que ha dado la Manuela Domínguez.

Considerando que Genara Cao no ha comparecido a pesar de haber sido oportunamente citada.

Considerando que las partes autoras justificaron completamente el crédito que es objeto de su alegación, cuyos frutos consisten en que ellos son cabaleros del foral de Casal de María, y que la Genara Cao y su hermana Teresa son llevadores, así como la Manuela Domínguez en el pregado foral y deudores por consiguiente de ochenta copelos y medio por frutos del año de 65.

Fallo que debo condenar y condeno al pago de los ochenta copelos y medio de centeno a la Genara Cao y Manuela Domínguez y en las costas a la Genara Cao, relevada de la Manuela por haber confesado y mandado al pago de lo que le corresponde a los demandados. Y mediante la rebeldía en que ha incurrido la Genara Cao, se publique esta sentencia a medio del periódico oficial de esta provincia para que se obste de conformidad con las prescripciones del art. 1190 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Y por esta así lo manda y firma de que yo secretario accidental, certifico. — José Alonso. — S. I., José Selas.

La copia de su original a que en caso necesario me refiero, y para que tenga efecto lo arriba inserto en el Boletín de la provincia, para la presente que firmo con el V.º B.º del señor juez en Verre a 16 de febrero de 1867. — José Selas, secretario interino. — V.º B.º — José Alonso.

El Jefe de la Sección 4.ª — D. Leandro Conde, secretario del juzgado de paz de la villa de Allariz.

Certifico que en juicio verbal celebrado en dicho juzgado, se dictó la sentencia siguiente:

En la villa de Allariz a 22 de febrero de 1867, el Lic. D. Ricardo Rodríguez Arias, juez de paz de la misma y su distrito municipal, por ante mí el secretario dijo: que habiendo visto la antecedente acta de juicio verbal celebrado entre Francisco Domínguez Rodríguez y Benito Conde y Conde demandantes y Manuel Rodríguez y Rodríguez, Benito González Tabada, Francisco Conde Malvysa, Pedro Conde Barrio, Juan Suarez Fernandez, Manuel Domínguez Piqueiro, Francisco Quintana Blanco, Manuel Fernandez Rodicio, Antonio Nanin Blanco, José Pérez y Pérez, Manuel Gonzalez Ferron, Rosalia Alvarez Lanol, Manuel Rodriguez, Bernardo Rodriguez y Hermenegildo Gonzalez, cuyos tres últimos en rebeldía y todos ellos demandados, y

Resultando que los primeros demandaron a los demás por los atrasos de rentas de cuatro forales que correspondían al Estado y redimieron por comple-

to los demandantes ofreciendo después la sub-redención a los demás conforeros que quisieron aprovecharla, entre los cuales lo hicieron los cabaleros de los cuatro forales por lo que exigían que dichos atrasos se les pagasen por una sola mano como prestación individual y mancomunada según el importe de ellos que consignaron a sé de valores.

Resultando que los demandados comparecieron todos menos Manuel y Hermenegildo Rodríguez y Hermenegildo Gonzalez, habiéndose mandado continuar el juicio en rebeldía de estos, y los comparecientes contestaron que siempre estuvieron prontos a contribuir con sus respectivas cuotas pero no hubiera quien las percibiese por menor y pasase por entero resistiéndose los demandantes a percibirla de la primera manera.

Resultando que ninguna de las partes dió ni ofreció prueba por lo que se hubo por terminada el acta:

Considerando que los demandados confesaron explícitamente ser tanto ellos como los constituidos en rebeldía, llevadores de los cuatro forales y que no impugnaron ni el tanto de atrasos demandados ni su importe establecido por los demandantes a sé de valores.

Considerando que la confesión en juicio hace plena prueba y que, también la hacen con respecto a los rebeldes las manifestaciones de sus conforeros, debiendo además resultar de los respectivos prorrateos vigentes:

Considerando que estos debían causar estado, regir y ser observados en cuanto a los comprendidos en ellos que no redimieron:

Fallo que debe condenar y condeno a los demandados a que por medio del mayor porcionista que de entre ellos resulte, en los respectivos prorrateos, satisfagan a los demandantes en el término de diez días las cantidades relativamente consignadas de 129 rs. y 85 céntos, y tres ferrados y nueve copelos en especie por el foral de Outeiro de Belvis, de 29 reales y 6 céntos, y nueve copelos y medio de trigo en especie por el de Juana Iglesias, de 65 rs. y 24 céntimos y un ferrado y veintiocho copelos de centeno en especie por el de Pousada, y de 28 rs. y 92 céntimos y veintinueve copelos y medio de centeno y tres de trigo en especie por el del Rial con las costas de este juicio.

Por esta su sentencia definitivamente respecto de los tres rebeldes, se notifique y publique con arreglo a la ley, así lo pronuncia, manda y firma de que certifico. — Ricardo Rodríguez Arias. — Leandro Conde, secretario.

Y para que conforme a la ley tenga efecto su inserción en el Boletín oficial de la provincia por la rebeldía de Hermenegildo Gonzalez, Manuel y Bernardo Rodriguez, expido el presente que firmo en este pliego entero del sello que se reconoce rubricada la primera hoja con la de que uso, previo el V.º B.º del señor juez. Allariz 27 de febrero de 1867. — Leandro Conde. — V.º B.º — Ricardo Rodríguez Arias.

Don Ramon de la Torre, secretario del juzgado de paz de la ciudad de Orense.

Certifico que en autos de juicio verbal en dicho juzgado, ventilados, recayó la sentencia que se copia:

En la ciudad de Orense a 23 de febrero de 1867, el Dr. D. Pedro Puga, juez de paz por ante mí secretario: vistos los antecedentes dijo que:

Resultando haber reclamado D. Manuel Rodríguez Lopez, vecino de esta capital, contra Manuel Pereira y su mujer Benita Domínguez de Vilor de la Baria, Alcaldía de Coles, aquel como principal deudor, y esta por la compañía en que se halla constituida, 600 rs., a saber: 260 derivados de préstamo y 340 de intereses recibidos y además las costas.

Resultando confeso el Manuel Pereira

en los extremos de la reclamación enunciada:

Resultando constituida la Benita Domínguez en rebeldía, por manera que queriéndose a declarar por confesa su rebeldía.

Considerando que por lo mismo, ambos están incurso en la responsabilidad demandada. Debía de condenar y condeno a los Manuel Pereira y Benita Domínguez por el concepto en que se les reconviene al pago de los 600 rs. a favor del Don Manuel Rodríguez Lopez y las costas, y se publique la presente en la forma que prescribe el art. 1190 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Así lo pronuncio y firma de que certifico. — Pedro Puga. — Ramon de la Torre, Secretario.

Concuerda con su original a que me requirio. Y para que tenga efecto su inserción en el Boletín oficial de esta provincia, libro la presente que firmo con el V.º B.º del Sr. juez. Orense 2 de marzo de 1867. — Ramon de la Torre, Secretario. — V.º B.º — Pedro Puga.

D. Gabriel Sotelo, escribano del juzgado de primera instancia de Orense.

Certifico que en incidente de pobreza sustanciado por ante mí en este juzgado, ha recaído la sentencia siguiente:

En la ciudad de Orense a 23 de febrero de 1867, el Sr. D. Antonio Gonzalez Albán, juez de primera instancia de la misma y su partido: vistos estos autos:

Resultando que el Procurador D. Ramón Iglesias a nombre de D. Manuel Sotelo Abadles, vecino de esta ciudad, se ha promovido incidente de pobreza solicitando que se declare pobre a su poderdante en atención de carecer de sueldo o salario permanente, industria y comercio; que los bienes que posee son insignificantes, pues pagados rentas y contribuciones ni 2 rs., le dejan de producción cuanto menos los 10 que en este país importa el doble jornal de un bracero, por lo que según derecho es legalmente y procede tal calificación y beneficio; concluyendo a que interpuso demanda y conferido traslado a Alejo y Rosa Pereira y el promotor fiscal se recibía a prueba y acreditados los extremos se la declare y mande asistir facilitándole testimonio:

Resultando que admitida dicha demanda incidental y conferido traslado por término de seis días al Promotor fiscal y los citados Alejo y Rosa Pereira, estos últimos nada han deducido, y acusada la rebeldía de derecho se siguió respecto de ellos en estrados y el primero formuló oposición y que se desestimase siempre que no se justificase completamente los hechos:

Resultando de la prueba practicada por el demandante que no posee bienes cuyos productos excedan al doble jornal de un bracero, y aun cuando disfruta un sueldo de 200 escudos anuales en eventual ni con mucho llega a cubrir aquel:

Resultando que el jornal ordinario que gana un bracero en esta capital es el de 5 reales:

Considerando que según el art. 132 de la Ley de Enjuiciamiento civil, debe declararse pobre al que viva solo de un salario y de productos de bienes, que todo graduado es una suma menor que el equivalente al jornal de dichos dos braceros, tanto mas que aquel no es permanente y amovible:

Considerando que en este caso se halla el D. Manuel Sotelo Abadles, y por lo mismo debe disfrutar de los beneficios que expresa el art. 131 de la citada Ley. S. S. por ante mí escribano dijo que debía de declarar y declarar pobre para litigar al dicho D. Manuel Sotelo Abadles a quien se debe y ayude como tal, entendiendo por ahora y sin perjuicio de lo prevenido para su caso y tiempo en los arts. 198, 199 y 200 de la misma.

Y por esta su sentencia definitiva, así



